









ver los obstáculos que pudieran oponerse á la realizacion de las obras;

Resultando que pedidos informes á la Sección correspondiente del cuerpo nacional de Ingenieros de Caminos, Canales y Puertos, á la Junta provincial de Agricultura, Industria y Comercio, al Consejo provincial y después á la Comision de higiene y Junta de Sanidad, lo evacuaron favorablemente en el concepto de ser de imperiosa necesidad el sanear dichos terrenos, por lo que se interesaba la higiene pública, por el beneficio natural y económico de los pueblos que le rodeaban, y por el que había de producir en último término á la provincia ó al Estado, sin perjuicio de los derechos de propiedad:

Resultando que en nuevo informe la Junta consultiva de Caminos, Canales y Puertos el 29 de Octubre de 1869 formuló las cláusulas bajo las cuales podia hacerse la concesion pretendida, y tambien la Direccion de Obras públicas; y en 12 de Enero de 1870 el Regente del Reino, conforme con lo propuesto por el Ministerio de Fomento y de acuerdo con el parecer de dicha Direccion, expidió un decreto declarando de utilidad pública para los efectos de la ley de expropiacion las obras de desagüe y saneamiento del valle denominado Raso del Portillo, que existe en los términos de los pueblos de Aldeamayor, Pedraja del Portillo y Boecillo, en la provincia de Valladolid; autorizando á D. Nicolás Polo y consocios para ejecutar las obras bajo la vigilancia del Ingeniero Jefe de la provincia y con arreglo á la Memoria y planos suscritos: que los concesionarios serian dueños á perpetuidad de los terrenos saneados, pero con la obligacion de ceder 488 hectáreas á los pueblos y propietarios que tenian derechos adquiridos sobre dicho valle: que si los pueblos y particulares no aceptasen la cesion en la forma y en los términos en que habian ofrecido hacerlo los concesionarios, podrian reclamar la indemnizacion que les declaraba el art. 105 de la ley de 3 de Agosto de 1866: que en el término de 15 dias, contados desde entonces, consignaria la empresa en la Caja general de Depósitos el 1 por 100 del presupuesto de las obras: que la empresa quedaba obligada á dar principio á estas dentro de seis meses, á continuarlas sin interrupcion y á dejarlas concluidas en el plazo de cuatro años, y á conservarlas en buen estado: que si al ejecutar los trabajos interrumpiese comunicaciones ú otros servicios públicos, habria de restablecerlos á sus expensas: que mientras estuviesen pendientes las obras no podria ser trasferida la concesion sin permiso del Gobierno: que si faltase la empresa á alguna de dichas condiciones, se entenderia caducada la autorizacion: que se declaraba á los concesionarios la preferencia para utilizar en riegos ú otros usos las aguas que afluan á los expresados terrenos, pero con la condicion de dejar á salvo todos los aprovechamientos establecidos y de presentar los proyectos é instruir los expedientes que previenen las disposiciones vigentes: que la empresa disfrutaria los derechos y privilegios declarados á las obras de esta clase por la legislacion actual, quedando tambien sujeta á las obligaciones que en la misma se establecen: que el Ingeniero Jefe de la provincia, ó uno de los que estuviesen á sus órdenes, procederia á verificar el destino de los terrenos encañados antes de que se diera principio á las obras, siendo de cuenta de los concesionarios los gastos que ocasionase este servicio, así como el de la inspeccion ó vigilancia, cuya orden se publicó el 21 de dicho mes de Enero en el Boletín de la provincia:

Resultando que hecho el depósito prevenido en la Caja general, y dado principio á las obras en 5 de Julio de 1870, en 14 del mismo mes el Licenciado D. German Gamazo, como apoderado de D. Pablo Valdés Sanz y otros vecinos de la Pedraja del Portillo, Aldeamayor de San Martin, Boecillo y Valladolid, todos dueños de heredades en el valle denominado Raso del Portillo, presentó demanda contenciosa en este Supremo Tribunal pidiendo se declarase procedente dicha via, y se revocase el decreto expedido por el Ministro de Fomento en 12 de Enero anterior, resolviendo que se cumpla en todo caso el art. 104 de la ley de 3 de Agosto de 1866 y se les señalara un plazo para que dispusiesen el desagüe necesario, alegando que la expropiacion no podia nunca extenderse á más de lo puramente necesario para la construccion de la obra pública cuya utilidad se haya declarado previamente, y en ningún caso es posible autorizar á los concesionarios de esta clase de obras para que se lucren con propiedades ajenas, destinándolas al mismo objeto á que sus primeros dueños las habian consagrado: que aunque el artículo 104 de la ley de aguas no lo ordenase, el buen sentido recomendaba ofrecer primeramente á los dueños de los terrenos el desagüe que habian solicitado Sabugo y Polo, una vez declaradas la necesidad y utilidad de llevarle á efecto; y sólo en el caso de haberse negado la mayoría de los dueños á ejecutar la desecacion, el Gobierno podria concederla á cualquiera empresa ó particular que se ofreciese á llevarla á cabo: que jamás las concesiones de obras de esta clase habian sido hechas en los términos absolutos y aun irritantes en que estaba concebida la de 12 de Enero, en que se adjudicaba el dominio, no sólo de los terrenos encañados, sino de cuantos habian podido ser objeto de la codicia de los peticionarios: que en frente de esta manera de disponer de las propiedades particulares podian ponerse los decretos de 15 de Junio y 22 de Julio de 1864, 14 de Julio y 3 de Setiembre de 1865, en que se hizo concesion solamente de los terrenos del Estado ó del comun que estuvieran ocupados por las aguas al tiempo de empezarse las obras; habiendo llegado la prudencia del Gobierno en el primero de dichos decretos hasta reservar una cuarta parte de los que comprendia la concesion á los pueblos que enumera, que tenian establecidos ciertos disfrutes sobre la laguna de Nava de Campos: que en el supuesto que no debiera aplicarse á este caso la ley de aguas de 3 Agosto de 1866, habria sido imposible instruir el expediente en los términos que se habia hecho, y otorgar tan vagamente como se habia otorgado la concesion de las obras de desagüe del Raso del Portillo, porque segun el párrafo vigésimo del art. 1.º del decreto de 29 de Abril de 1860, el Ministro de Fomento sólo podia autorizar las empresas que tuvieran por objeto el aprovechamiento de las aguas de pantanos formados en terrenos del Estado ó del comun, nunca si los pantanos comprendian terrenos de particulares, como acontecia en este caso:

Resultando que reclamado y venido el expediente gubernativo, y entregado con los autos al Fiscal, expuso que la concesion de que se trata se ha otorgado con arreglo á las prescripciones de la ley de aguas vigente, la cual dispone en su art. 277 que las providencias de la Administracion activa causarán estado si no se recurre contra ellas por la via gubernativa ante el inmediato superior jerárquico, ó por la via contenciosa, siempre que proceda dentro del plazo que señalen las leyes y reglamentos, ó en su defecto dentro de tres meses, contados desde la fecha en que se publique la providencia ó se notifique al interesado; y apareciendo que el decreto objeto de la demanda se publicó en el Boletín oficial de la provincia el 21 de Enero, y que la demanda se presentó en la Secretaría de este Supremo Tribunal el 13 de Julio, se oponia á su admision en justa observancia de la ley y de la jurisprudencia constante en casos análogos:

Visto, siendo Ponente el Magistrado D. Ignacio Vieites: Considerando que la índole compleja de las cuestiones que se promueven y resuelven en los expedientes sobre desecacion de terrenos pantanosos exige la aplicacion de diferentes leyes, como ha sucedido en el de Raso del Portillo, á que se refiere la

presente demanda, segun lo demuestra el contexto del decreto expedido por el Ministerio de Fomento en 12 de Enero de 1870, contra el que se reclama, puesto que se arregla en sus disposiciones á los de la ley de expropiaciones de 17 de Julio de 1866 y á los de las de aguas de 3 de Agosto de 1866:

Considerando que, atendida la diversa naturaleza de las materias que comprende dicha ley de 3 de Agosto, se deduce claramente que el final del art. 277, en que se fija el plazo de tres meses para acudir á la via contenciosa, en defecto del que señalan las leyes y reglamentos, es aplicable únicamente á las cuestiones especiales sobre aguas, ya por hallarse colocado en el capítulo 14 que trata de su policia, ya por concretarse á las providencias dictadas en materia de aguas, y ya porque de su letra espíritu no puede inferirse que alcance á las demás contenidas en la ley, pues que en tal caso hubiera ocupado el lugar oportuno entre sus disposiciones generales:

Considerando que en esta clase de negocios procede el recurso contencioso, tanto en la parte concerniente á las expropiaciones, conforme al art. 25 del reglamento de 27 de Julio de 1865 para la ejecucion de la citada ley de 17 de Julio, como respecto de la concesion de las obras de desecacion y de los terrenos saneados, siendo indudable que para interponerle por cualquiera de los dos conceptos tienen los interesados el plazo de seis meses que concede el art. 3.º del real decreto de 21 de Mayo de 1863:

Y considerando, por lo expuesto, que la demanda actual ha sido presentada en tiempo, y que reúne todos los demás requisitos que requieren los reglamentos vigentes;

Fallamos que debemos declarar y declaramos procedente la via contenciosa, y que há lugar á la admision de la demanda interpuesta en nombre de D. Pablo Valdés Sanz y otros vecinos y labradores de la Pedraja del Portillo, Aldeamayor de San Martin, Boecillo y Valladolid, y por parte al Licenciado Don German Gamazo en su representacion, con el domicilio que señala; y póngasele de manifiesto el expediente por término de 20 dias para los efectos que correspondan.

Y por esta nuestra sentencia, que se publicará en la Gaceta oficial y se insertará en la Coleccion legislativa, sacándose al efecto las copias necesarias, así lo pronunciamos, mandamos y firmamos.—Juan Gonzalez Acevedo.—Tomás Huat.—Gregorio Juez Sarmiento.—José Maria Herreros de Tejada.—Luciano Bastida.—Juan Jimenez Cuenca.—Ignacio Vieites.

Publicacion.—Leida y publicada fué la anterior sentencia por el Excmo. Sr. D. Ignacio Vieites, Magistrado del Tribunal Supremo, celebrando audiencia pública la Sala cuarta, de que certifico como Secretario Relator en Madrid á 21 de Febrero de 1871.—Enrique Medina.

ADMINISTRACION CENTRAL.

MINISTERIO DE ESTADO.

Subsecretaría.

Despacho telegráfico.

Versalles 7 de Abril, á las nueve de la noche; Madrid ídem, á las nueve y treinta y cuatro minutos de la noche.—El Encargado de Negocios de España al Excmo. Sr. Ministro de Estado.—Madrid:

«Después de un reñidísimo combate, que empezó ayer á media noche, han ocupado las tropas el puente de Neuilly, que facilitará el ataque de la puerta de Marolles. Ha habido bastantes pérdidas de una y otra parte. Dos Generales del Gobierno han sido heridos, uno de ellos gravemente.»

MINISTERIO DE HACIENDA.

Direccion general de Contabilidad de la Hacienda pública.

BIENES DE PROPIOS Y PROVINCIALES.—VENTAS POSTERIORES AL 2 DE OCTUBRE DE 1868.

NÚMERO 661.

Carpeta de las relaciones de ingresos realizados por las dos terceras partes del 80 por 100 de bienes de Propios y provinciales enajenados desde el 2 de Octubre de 1868 en adelante, que examinadas y aprobadas por esta Direccion general se remiten á la de la Deuda pública para que, en cumplimiento de lo dispuesto en el art. 8.º de la ley de 1.º de Abril de 1859, emita inscripciones nominales con renta de 3 por 100 anual á favor de las corporaciones que á continuacion se expresan.

Table with columns: NÚMERO de orden, CORPORACIONES, MES Y AÑO á que pertenecen las relaciones, IMPORTE en Escs. Mills. Includes entries for Provincia de Albacete and Ayuntamiento de Almansa.

Main table with columns: NÚMERO de orden, CORPORACIONES, MES Y AÑO á que pertenecen las relaciones, IMPORTE en Escs. Mills. Lists various municipalities and their corresponding dates and amounts.

Table with columns: NÚMERO de orden, CORPORACIONES, MES Y AÑO á que pertenecen las relaciones, IMPORTE en Rs. Céntis. Includes entries for Provincia de Albacete and Ayuntamiento de Albaladejo.

Madrid 1.º de Abril de 1871.—El Director general, Félix de Bona.





